Manizales, agosto 22 de 2020

OTRA MIRADA

**¿VIVIENDO AL DÍA?**

Por: Oscar Correa Marín

Uno de los rasgos más dramáticos de la miseria, lo constituye la triste obligación de vivir al día, de salir a la calle a “guerrearse” el pan cotidiano. Si esta triste condición lacera en el plano individual, ¿qué decir cuando son las universidades públicas colombianas las que deben trasegar este perverso camino? Una dura realidad que mal habla de nuestro Estado y de quienes históricamente han manejado sus destinos.

La Universidad no es un fin en sí misma, es el vehículo para transformar una sociedad, para generar conocimiento útil que beneficie a las comunidades, es un medio vital para darle sentido a la construcción social de una nación.

Algunos podrán decir que esta dinámica de buscar sustento es la condición permanente de todas las instituciones, incluyendo las universidades privadas, pero quizás olvidan dos factores esenciales: las universidades públicas atienden los estratos más bajos de la población y el conocimiento generado en sus procesos de investigación, debe orientarse prioritariamente al beneficio social común, sin ánimo de lucro.

En palabras del Dr. Jairo Torres. Director del Sistema de Universidades Estatales (SUE) que convoca a las 32 universidades públicas del país, estas tienen algo más de 620000 estudiantes, el 71% son de estratos 1, 2 y 3. Toda una multitud de jóvenes que, en su gran mayoría, no podría avanzar en un futuro de bienestar económico y realización personal, para ellos y sus familias, si el Estado no brinda educación de calidad y adecuada financiación a sus instituciones públicas de educación.

En reciente foro de la Comisión Primera del Senado, El Dr. José Fernando Isaza hablaba de un escalofriante indicador al señalar que, por cada millón de pesos que un estudiante, o el Estado, dejan de pagar en matrícula, al retirarse del sistema universitario público, la sociedad pierde casi $30 millones, dinero que la sociedad ha invertido en su formación, hasta el momento de retiro. Un costo social que parece no importar.

Son realidades que explican tres grandes desafíos que nuestro Estado no ha sido capaz de afrontar dignamente: Brindar financiación adecuada a las universidades públicas, garantizar la gratuidad o matrícula cero en los niveles socioeconómicos más bajos y brindar educación de mejor calidad.

En cuanto al primer desafío, los expertos coinciden en la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992 que establece una financiación anual de las universidades públicas acorde con el índice de precios al consumidor (IPC), pero todos sabemos que, las presiones sociales sobre el aumento de cupos universitarios, los incrementos salariales y las nuevas demandas por tecnología y por mejores recursos educativos, entre otros compromisos, exceden los aumentos vía IPC. Basta con observar que para 1993 el SUE contaba con 160000 estudiantes y en la actualidad esa población ha crecido casi 4 veces. Por ello, hoy se estima, que hay un déficit global del orden de 12 billones de pesos apenas para “poner al día” a las universidades públicas.

Realmente no son tan “públicas” nuestras universidades. En promedio, las universidades del SUE se financian con un 48% de los fondos provenientes de su propia generación de ingresos. La Universidad Nacional de Colombia, la más importante del país, solo se financia el 49% con aportes del Estado, el resto lo deriva de sus ingresos. De esta crítica ecuación surge el segundo reto, pues las rentas propias provienen de las matrículas (principalmente de posgrados) y de recursos por ejecución de proyectos, son fuentes afectadas severamente por la pandemia. Por ello se requieren más recursos del Estado para evitar la deserción, garantizar la matrícula cero y compensar la significativa reducción de ingresos.

El tercer desafío, íntimamente relacionado con los dos anteriores, nos lleva a aseverar que no podremos superar las desigualdades y las condiciones de atraso, si el Estado no asume seriamente sus compromisos, para garantizar una educación de clase mundial.

Para comparar solo algunas cifras de universidades mejor posicionadas en Latinoamérica, esas sí públicas, donde más del 90% de los recursos provienen del Estado: La Universidad Autónoma de México posee un presupuesto de 2380 millones de dólares, equivalentes a una inversión de 9500 dólares por estudiante, la Universidad de Sao Paulo con un presupuesto de 1090 millones de dólares, hace una inversión de 11850 dólares por estudiante, y la Universidad de Chile con un presupuesto de 1030 millones de dólares, hace una inversión de 28000 dólares por estudiante. En nuestro país, la Universidad “pública” más grande, la Universidad Nacional posee un presupuesto de 430 millones de dólares, equivalentes a 7400 dólares por alumno año.

Cuando los esfuerzos cotidianos solo sirven para sobrevivir, para “vivir al día” difícilmente se construye futuro. El Estado tradicionalmente ha verbalizado una realidad, haciendo creer históricamente que la educación importa, pero lo que realmente importa son los hechos de esa realidad y estos nos dicen que no vamos por buen camino.